



 **realidad
económica**

Nº 337 · AÑO 51

1º de enero al 15 de febrero de 2021

ISSN 0325-1926

Páginas 89 a 110

AGRICULTURA FAMILIAR

XIII Jornadas Nacionales de Investigadores en Economías Regionales
**Prohibido hacer política: regulando la
participación de organizaciones rurales
subalternas***

Jimena Ramos Berrondo**

* Este artículo de investigación contó con el apoyo institucional y financiero de la Agencia Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina (Proyectos PICT 2018-2284 y PICT 2014-2676), y con mi beca postdoctoral con sede en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL).

** Doctora en Ciencias Sociales y magíster en Diseño y Gestión de Políticas y Programas Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana de México. Becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con sede en el CEIL, Saavedra 15, Piso 4 (C1083ACA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. jramos@ceil-conicet.gov.ar



Resumen

Este artículo busca reflexionar sobre los cambios ocurridos en la institucionalidad pública estatal orientada al desarrollo rural y la agricultura familiar en Argentina a partir del inicio del gobierno de Cambiemos, prestando atención a las tecnologías gubernamentales a través de las cuales se vinculan funcionarios y referentes de organizaciones campesinas. Para ello, se construyó un estudio de caso que hace foco en los intercambios entre funcionarios de agricultura familiar y dirigentes campesinos de la Confederación Campesina Nacional (COCAN) en los consejos de desarrollo rural durante el periodo 2015-2018. Se analizan tanto los temas que se discuten como la manera en que las organizaciones campesinas realizan diversas prácticas organizativas (al interior de ellas y con otras organizaciones) para visibilizar sus problemáticas y disputar políticas para el sector. Metodológicamente, se optó por una estrategia cualitativa basada en entrevistas a más de una veintena de funcionarios y dirigentes campesinos, así como observación participante realizada en diversas reuniones y seguimiento de los posicionamientos de los actores a través de distintos encuentros, redes sociales y medios de comunicación.

Palabras clave: Tecnologías de gobierno - Prácticas organizativas - Organizaciones de agricultura familiar - Políticas de agricultura familiar y desarrollo rural

Abstract

XIII National Conference of researchers in regional economies

Forbidden to make politics: regulating the participation of subordinate rural organizations

This article seeks to reflect on the changes that occurred in the state public institutions oriented towards rural development and family farming in Argentina during Cambiemos' government, paying attention to government technologies through which officials and leaders of peasant organizations are linked. To this end, a case study was built that focuses on exchanges between family farming officials and peasant leaders of the National Peasant Confederation (COCAN) in the rural development councils during the 2015-2018 period. Here we analyze both the issues discussed and the way in which peasant organizations carry out various organizational practices (within them and with other organizations) in order to make their problems visible and dispute rural development policies. Methodologically, a qualitative strategy was chosen based on interviews with more than twenty peasant leaders and state agents, as well as participant observation carried out in various meetings and monitoring of the positions of the actors through different meetings, social networks and media.

Keywords: Government technologies - Organizational Practices - Family Farming organizations - Rural development and family farming policies

Introducción

“Todos los líderes que recomiendan a los trabajadores no meterse en política deben saber que somos los campesinos y los obreros los más abocados a intervenir en actos políticos, porque como trabajadores somos los que constituimos las aplastantes mayorías ciudadanas y por lo mismo tenemos más intereses que cuidar, pues no hay que olvidar que todos los capitales acumulados en unas cuantas manos son nada menos que el resultado del desgaste de las sagradas energías de los trabajadores, obreros y campesinos. Por lo mismo, afirmo que los obreros y los campesinos sí debemos de hacer política en todo el país, porque del buen gobierno que formen los trabajadores vendrán las buenas formas de vivir con entera justicia, garantías, independencia y positiva libertad.”

(Jaramillo¹, citado en De Grammont, 1989, p. 264)

La producción del desarrollo rural como problema de gobierno en la Argentina se remonta a las reivindicaciones de diversas organizaciones sociales agrarias a comienzos del siglo XIX, y luego a las luchas de las Ligas Agrarias y a los estudios realizados sobre el minifundio por diversos sociólogos rurales durante la década del 70. Posteriormente, en 1993 se creó el Programa Social Agropecuario (PSA), el primer programa de gobierno de alcance nacional con el objetivo de atender a los pequeños productores. Así, desde una perspectiva histórica, se observa una reconfiguración inconclusa de las políticas estatales orientadas a la promoción del desarrollo rural, y en particular, a los sujetos agrarios subalternos. En ellas se generan rupturas y continuidades y se instalan nuevas miradas, problemáticas y categorías, como lo fue la agricultura familiar (AF) a partir de su

¹ Rubén Jaramillo fue un dirigente campesino mexicano del estado de Morelos, México. Continuador de las luchas de Emiliano Zapata y fundador del Partido Agrario Obrero Morelense (PAOM). Fue líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) donde luchó por las condiciones de los trabajadores en los cañaverales del estado de Morelos. Fue asesinado por militares en 1962 bajo la orden del presidente López Mateos (De Grammont, 1989).

promoción en el Mercosur –por medio de Brasil, durante 2003–, o la creación y modificación de instituciones orientadas al desarrollo rural y la reconfiguración de tramas organizacionales a partir del conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la Mesa de Enlace en 2008 (Berger, 2018c).

La cuestión² del desarrollo rural y la agricultura familiar se ha ido redefiniendo como consecuencia de los ideales y principios de los diferentes actores y de su manera de problematizar la realidad. Estos problemas son estudiados, calculados y analizados por diferentes fuerzas que buscan volver los programas operables a través de técnicas, aparatos, documentos y procedimientos, mediante los cuales las autoridades buscan corporizar y efectivizar las ambiciones del Gobierno (Rose & Miller, 1992). En este sentido, me interesa cómo la gestión de Mauricio Macri concibió a las organizaciones de agricultura familiar y sus problemáticas desde el Ministerio de Agroindustria, y de qué manera estas ideas se hicieron operables a través de diversas tecnologías de gobierno (legislación sobre agricultura familiar, registros de organizaciones, decretos, reglamentos, reuniones, proyectos, etc.) y fueron cuestionadas y resistidas a través de los referentes de las organizaciones de agricultura familiar³. Para ello construí un estudio de caso que trata los vínculos entre el dirigente de la Confederación Campesina Nacional (COCAN) y los funcionarios de gobierno en los Consejos de Desarrollo Rural (CDR)⁴, espacios participativos creados en diferentes niveles (regional, nacional y provincial) donde se vinculan dirigentes de organizaciones, técnicos y funcionarios públicos con la finalidad de discutir las políticas vinculadas a la agricultura familiar y el desarrollo

² Empleo el concepto de Oszlak y O'Donnell (1995) para quienes la cuestión tiene que ver con un asunto socialmente problematizado que busca instalarse en la agenda pública para tener un tratamiento específico.

³ Es importante remarcar que estos referentes de organizaciones son considerados como población rural subalterna en el sentido de que históricamente han carecido del acceso básico a servicios y recursos para la producción agrícola y la reproducción de sus necesidades básicas.

⁴ Los nombres de las organizaciones campesinas, movimientos sociales, los funcionarios públicos y las entidades de gobierno que se analizan, así como los CDR y la Oficina de Desarrollo Rural (ODR), han sido cambiados para mantener la confidencialidad de mis informantes. Solo se mencionan los nombres reales de los ministros y secretarios para que el lector pueda contextualizar las diferentes gestiones de agricultura familiar a través del periodo de tiempo analizado.

rural desde 2014. Estas tecnologías de gobierno no deben ser vistas como reuniones puntuales donde se discuten cosas en un tiempo y espacio determinado sino como escenarios que vinculan actores que representan organizaciones, espacios y territorios de manera simultánea y que conforman redes complejas y superpuestas (Berger, 2018b). Lo interesante de los CDR como objeto empírico es que son un microcosmos para analizar: i) lenguajes y discursos al interior de las reuniones (cómo los actores se reconocen entre ellos), ii) intercambios que se extienden por fuera de las reuniones pero que se definen, redefinen y discuten ahí (programas, proyectos, normativas, leyes, cargos en la función pública).

Así, en los CDR es preciso observar el flujo de acción: qué está pasando, por qué pasa, quiénes se comprometen en este proceso, con quiénes y en contra de quiénes (Wolf, 1989). Para ello, me concentro en el poder táctico organizacional definido como el poder que tiene un actor sobre los flujos de acciones que son parte del ambiente de otro actor o actores (Wolf, 1989). Cómo ciertos actores circunscriben las acciones de otros en determinados escenarios. A su vez, este poder está contenido dentro de un poder más amplio definido como poder estructural. En palabras de Wolf (1989, p. 586), es “un poder que organiza y orquesta los mismos escenarios y espacios y que especifica la distribución y dirección en la que fluye la energía”. Este poder estructura la economía política y moldea el campo social de acción en el sentido de que hace que ciertos tipos de comportamientos sean posibles y otros sean menos posibles o imposibles (Wolf, 1989). Wolf (1989) sostiene que es importante analizar los vínculos entre ambos tipos de poderes, es decir, de qué manera el poder estructural del gobierno de Cambiemos incidió en el poder táctico que las organizaciones de agricultura familiar ejercen dentro y fuera de los espacios participativos.

Se utilizó una metodología cualitativa que consistió en observación participante en numerosas reuniones del CDR en diferentes niveles (nacional, subnacional y local); entrevistas en profundidad a una veintena de funcionarios y dirigentes de organizaciones de agricultura familiar; y análisis documental de comunicados de organizaciones, diarios, normativas y actas de reuniones. Asimismo, me he nutrido del seguimiento del posicionamiento de los dirigentes de organizaciones de agricultura familiar a través de diversas redes sociales (Facebook, correo electrónico,

WhatsApp, blogs de las organizaciones, etc.). Las técnicas de recolección anteriores fueron trianguladas para el análisis de datos prestando atención al sentido que los actores confieren a las políticas de agricultura familiar y desarrollo rural, así como a las contradicciones entre sus discursos y prácticas.

El presente artículo se divide en dos apartados. El primero busca explicar cómo el cambio de paradigma del gobierno nacional incide en las agencias estatales orientadas a la agricultura familiar y el desarrollo rural. El segundo analiza las prácticas organizativas de los dirigentes de las organizaciones de agricultura familiar en un contexto de recorte de programas y proyectos y reducción presupuestaria, enfocándose en las estrategias de los miembros de la COCAN y prestando atención a los intercambios entre los dirigentes campesinos y los agentes estatales al interior del CDR. Por último, se encuentran las conclusiones.

1. ¿Cómo se reflejan los cambios en el paradigma de gobierno en las agencias estatales dedicadas a la AF y el desarrollo rural?

En contraposición con la etapa neoliberal (1991-2001), varios autores sostienen que durante el periodo 2002-2011 hubo un desplazamiento del rol del Estado que se reflejó en el tipo de políticas públicas tendientes a favorecer el crecimiento del empleo y la inclusión social (García Delgado & Ruiz del Ferrer, 2013), y que esto se tradujo al plano de la institucionalidad pública estatal orientada al medio rural con innovaciones relevantes en distintos niveles (Lattuada, Nogueira & Urcola, 2012). Por ejemplo, la ampliación de la política de desarrollo rural a través de la participación argentina en la Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF)⁵ del Mercosur; la creación del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGyP)⁶, que permitió jerarquizar la problemática del desarrollo rural y darle visibilidad a los productores familiares; y una nueva estrategia de vinculación entre el Estado y

⁵ Fue constituida en 2004 por diversas organizaciones de agricultura familiar de los países del Mercosur (entre ellas Federación Agraria Argentina). El objetivo de su conformación era delinear políticas diferenciadas para la agricultura familiar y buscar oportunidades para su inserción en los mercados de integración regional.

⁶ A partir de 2015 cambió su nombre a Ministerio de Agroindustria.

la sociedad civil que contribuyó a la formación de cuadros del sector público y de dirigentes sectoriales (Lattuada, Márquez & Neme, 2012) y a la promoción del empoderamiento y la participación de los sectores más vulnerables de la población rural (Lattuada, Nogueira & Urcola, 2012). Esta última se tradujo en la creación de espacios de diálogo y discusión que fomentó la ex Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca, tales como el Foro Nacional de Agricultura Familiar y el Consejo de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (CAFCI)⁷.

Los avances referidos anteriormente se pusieron en jaque con la llegada de Cambiemos al poder, que implicó un cambio de paradigma de gobierno donde se priorizaron otros valores: un modelo económico que favoreció “a los sectores que acumulan sobre la base de la renta, en el marco de un esquema primario-exportador que solo piensa en el abaratamiento de los costos laborales” (Lorca, 2017). Pero este paradigma no solo se observó en los cambios de corte económico sino en la dimensión cultural y moral (Knight, 2002) propia del Estado neoliberal, donde el ciudadano es visto como un hombre emprendedor, libre y autónomo que persigue sus preferencias para maximizar su calidad de vida (Rose & Miller, 1992). Esto se reflejó en el “cambio cultural” (que Macri enfatizó desde su campaña) y en la manera en que buscaba llevar a la sociedad a un cambio de valores donde predominara el “emprendedurismo, de corte individual, orientado hacia el éxito y la felicidad económica y personal; que busca debilitar ciertos valores de la cultura política argentina como el progresismo y los lazos de solidaridad fuertes” (Sarmiento, 2017).

Lo interesante es reflexionar sobre cómo este cambio en los ideales y la racionalidad política del Gobierno tuvo efectos en la visión que se tiene de los agricultores familiares y su incidencia en las tecnologías de gobierno que distintas fuerzas intentaron volver operables para perpetuar, cambiar o implantar nuevas ideas. La visión que imperó hacia el sector de la agricultura familiar durante la gestión macrista estuvo ligada al cambio de funcionarios y sus respectivas trayectorias. En este sentido, los funcionarios no hacen lo que quieren sino lo que creen, orientando

⁷ Creado en 2014 por la Secretaría de Agricultura Familiar mientras estaba a cargo de Emilio Pérsico.

el trabajo en función de cómo cada uno cree que deben plasmar los objetivos en el territorio (Berger, 2018c).

A inicios de la gestión se nombró como ministro a Ricardo Buryaile, productor ganadero formoseño y ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una entidad de tercer grado que agrupa a distintas federaciones y confederaciones en todo el país⁸ y que históricamente ha estado vinculada a medianos y grandes productores, principalmente dedicados a la ganadería (Panero, 2018). Los miembros más cercanos de su gabinete pertenecían a la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), una asociación de empresarios del agro; y a la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid). Ambas organizaciones son “un engranaje fundamental del agronegocio, empresarios mentores ideológicos y del *lobby* transgénico. Nunca sus cúpulas habían formado parte del Gobierno” (La Tinta, 2016).

En un discurso durante 2015, Buryaile (Infocampo) pronunció lo siguiente:

Las instrucciones que van a llevar adelante los organismos de INTA y SENASA es ni más ni menos que la de una política agroindustrial en la Argentina. Lo que van a desarrollar es lo que ha dicho el Presidente, Mauricio Macri, ser el “supermercado del mundo”.

Los funcionarios representan una idea de gobierno y la materializan a través de distintos instrumentos (Sharma y Gupta, 2006). Durante la gestión macrista algunos de los principales cambios instrumentalizados en las políticas de agricultura fueron los siguientes: i) beneficios otorgados a los grandes productores agropecuarios a través de exenciones impositivas e instrumentos legales que los favorecieron⁹; ii) modificación de la estructura estatal orientada a los pequeños

⁸ Entre las más importantes se encuentran Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa (CARBAP); Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), que incluye las provincias de Córdoba, Catamarca y La Rioja; Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER); y Confederación de Asociaciones Rurales de la Provincia de Santa Fe (CARSFE). Cuenta con cerca de 100.000 productores agropecuarios asociados.

⁹ Como la Ley de Tierras 26.737, que a través de su Decreto 274 legalizó el límite a la extranjerización de suelo nacional; y el proyecto de Ley de Semillas promovido por el Ministerio de Agroindustria con el

productores y reducción presupuestal de los programas de agricultura familiar¹⁰ que, según Vigil (2019, p. 8)

afectaron especialmente a los estratos más vulnerables, alrededor del 75% de los productores, ya que para ellos hubo menos programas y asesoramiento técnico. Por un reempadronamiento dispuesto para beneficiarios del Monotributo Social Agropecuario (MTSA) quedaron sin cobertura social y de salud un número aún no determinado de productores pero que se estima alto. Se sabe que sus beneficios llegaban a cerca de 100.000 personas a la hora del reempadronamiento.

Si bien es importante mencionar que históricamente las políticas públicas para la agricultura familiar y el desarrollo rural nunca ocuparon un lugar central en la agenda de gobierno, durante el periodo 2016- 2018 se observa una redefinición del sujeto destinatario de las mismas en la que se tiende a favorecer a los sectores más capitalizados de esta categoría, permeando una mirada economicista, y donde se considera productivos únicamente a los que tienen cierto grado de capitalización (Berger, 2018c, p. 52).

Se profundizó, entonces, una mirada que existía desde ciertos actores estatales durante el gobierno anterior, la de considerar a los pequeños productores como un estrato vulnerable e inviable para el cual no se justifica la inversión estatal orientada a su desarrollo económico y productivo. Esto lo dio a conocer Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Agroindustria, cuando expresó que el Ministerio no se podía hacer cargo de los productores ineficientes. Etchevehere fue presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA)¹¹ y protagonizó un papel importante en las ne-

apoyo de Monsanto y otras empresas que busca cobrar regalías por el uso de semillas creando un mecanismo de renta a favor de las grandes empresas (Greenpeace, 2017).

¹⁰ En 2016, el presupuesto asignado para la Secretaría de Agricultura Familiar fue de 322 millones de pesos (24,8 millones de dólares). En 2017 se asignó un 45% menos sin actualizar por inflación, contra el 65% de aumento que reclamaron los funcionarios y que terminaron renunciando en negativa a su pedido (Vigil, 2019, p. 27).

¹¹ Fundada en Buenos Aires en 1866 es la entidad más antigua del sector e históricamente ha representado a los grandes terratenientes de la zona pampeana, principalmente a los ganaderos bonaerenses. Conserva como pilares identitarios su antiperonismo, el tradicionalismo y la fuerte defensa del liberalismo económico (Panero, 2018).

gociaciones entre la Mesa de Enlace y el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (en adelante CFK). Cabe destacar que desde que José Alfredo Martínez de Hoz estuvo a cargo del Ministerio de Economía, nadie más de la SRA había ocupado un cargo en el gobierno nacional (Vigil, 2019, pp. 15-16).

Así el gobierno de Cambiemos “llevó a cabo una ‘política de bloqueo’¹² hacia los sectores agrarios subalternos consistente con su orientación política general” (Berger, 2018, p. 53). Esto se reflejó en la manera en que los funcionarios a cargo de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial¹³ modificaron una serie de conceptos y normativas (elaborados durante el gobierno de CFK) para inscribir, cuantificar y clasificar a los agricultores familiares y sus organizaciones a través del Registro Nacional de Agricultura Familiar (ReNAF) y el Registro Nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar (ReNOAF). De igual manera, reformularon los “parámetros objetivos de representatividad de las organizaciones de agricultura familiar (OAF) a fin de definir el universo de organizaciones a ser invitadas al Consejo de Agricultura Familiar Indígena y Campesino (CAFCI)”. Para ello pusieron como requisito que debían estar debidamente registradas y activas en el ReNOAF y poseer alcance nacional “comprobado y documentado en al menos 5 provincias” (Borrador de la Resolución ReNAF- ReNOAF, 2018).

De la misma manera, si desde la gestiones de Néstor y Cristina Kirchner se discutió y trabajó mucho la participación de los miembros de las organizaciones en la implementación del ReNAF y el ReNOAF –por ejemplo, en el proceso de registro de datos–, desde la gestión de Santiago Hardie (ex secretario de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial) se estipuló que el registro de datos sería únicamente responsabilidad de la Secretaría y de los técnicos habilitados para dicha función (Borrador de la Resolución ReNAF- ReNOAF, 2018).

¹² Berger retoma el concepto de Oszlak y O'Donnell (1995) para quienes las políticas de bloqueo consisten en estrategias para negar un problema (en este caso, las reivindicaciones de los agricultores familiares) que pueden consistir en negarlo, relegarlo al olvido o reprimir a quienes intentan plantearlo.

¹³ Esta secretaría vino a reemplazar y fusionar lo que anteriormente eran la Secretaría de Desarrollo Rural y la Secretaría de Coordinación Político Institucional y Emergencias Agropecuarias del ex Ministerio de Agricultura (Grasa, 2016).

Cabe destacar que los documentos jurídicos no deben verse como textos estáticos sino como el resultado de negociaciones permanentes entre los agentes estatales y los dirigentes de organizaciones de agricultura familiar, donde ambos buscan incidir en condiciones desiguales de poder. Los diferentes borradores que anteceden todo tipo de resolución muestran la complejidad del proceso de creación de tecnologías de gobierno. La comparación del borrador de la resolución analizada con otros borradores anteriores muestra cómo se van redefiniendo tanto los parámetros de caracterización de la agricultura familiar (las organizaciones pugnaban porque el ingreso para ser considerado “agricultor familiar” fuera mayor a lo que en un principio se buscaba considerar). De la misma manera, se observa cómo el Gobierno volvió a modificar conceptos que ya venían trabajándose desde hacía años en el seno de la REAF y el Foro Nacional de Agricultura Familiar (FoNAF), como la definición de “agricultor familiar”.

2. Prácticas organizativas de las organizaciones de agricultura familiar para disputar los sentidos de las nuevas políticas de agricultura familiar y desarrollo rural

Ante la gravedad del contexto anterior, las organizaciones de agricultura familiar llevaron a cabo diversos procesos organizativos tanto al interior como entre ellas con la finalidad de incidir y disputar el sentido de estas tecnologías de gobierno. Estos procesos organizativos no deben ser vistos como una acción colectiva, conjunta y direccionada sino como un repertorio de múltiples prácticas organizativas donde los dirigentes de las organizaciones y sus miembros atraviesan procesos de fusión y fisión, así como emprenden estrategias cambiantes según su trayectoria, la capacidad de la organización, su estructura y el contexto económico y político en el que interactúan (Nuijten, 2003; Wolf, 1989).

En el caso que nos ocupa algunas organizaciones de agricultura familiar decidieron unirse para realizar ciertos eventos como las Jornadas Nacionales de Lucha Campesina Indígena por Tierra, Trabajo y Soberanía Alimentaria de abril de 2016; los comunicados conjuntos donde denunciaban la escasez de presupuesto para el sector y el agravamiento de conflictos de tierras; los verdurazos; y la manifestación frente al Ministerio de Agroindustria y en varias provincias del país en 2018 (Vigil, 2019).

Estas organizaciones de agricultura familiar se caracterizan por la diversidad de sus intereses y de los sectores que representan. Algunas de ellas tienen una trayectoria histórica desde el siglo pasado representando los intereses de pequeños y medianos productores capitalizados de las regiones más ricas y productivas del país. Otras, que representan a los campesinos de las regiones más pobres del país (NEA y NOA), se conformaron a partir de la década del 80 a raíz de su vinculación con ONG y organismos de derechos humanos. A partir de 2004, varias organizaciones que venían vinculándose desde los 90 comenzaron a participar en diferentes espacios regionales. Se trata de organizaciones con representaciones diversas (campesinos, pueblos indígenas, mujeres rurales) que se caracterizan por la modificación de sus formas de agregación y representación (Berger, 2018a).

Es importante mencionar que, a partir de 2015, estas acciones se dieron en un contexto donde se reactualizaron los vínculos entre las organizaciones y el Gobierno, y donde emergieron nuevos actores que buscaron disputar la representación del sector campesino e indígena. Ya sea buscando mediar entre ellos y el nuevo gobierno (como lo fue la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado Argentino), proponiendo que las organizaciones indígenas y campesinas se incorporasen a partidos políticos de reciente conformación en el norte de Argentina, o impulsando nuevos frentes donde se vinculasen diferentes organizaciones para tener mayor fuerza en las negociaciones.

En este sentido, las organizaciones siempre incurren en el dilema sobre las ventajas y desventajas que conlleva adherirse o participar de estas prácticas organizativas. Por ello, cuando las invitan a participar de diferentes espacios (políticos electorales, de reflexión y análisis, etc.) siempre está presente la pregunta de quién convoca y a quiénes representan aquellos que convocan. Durante las gestiones kirchneristas existió una amplia discusión por parte de los dirigentes de las organizaciones de agricultura familiar en torno a si debían incorporarse al Frente Agrario del Movimiento Evita y a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Sus visiones y decisiones sobre estas temáticas están ligadas a su historia y a los vínculos que han tenido con otras organizaciones en el pasado.

En ese contexto de reducción presupuestal (aunado al escaso presupuesto que ya existía para la agricultura familiar), los dirigentes de organizaciones de agricultura familiar se manifestaron a través de diferentes medios para reclamar por “políticas diferenciadas para el sector” ante lo que consideraban un “vaciamiento de las políticas de agricultura familiar” que ponía en riesgo los derechos y la institucionalización adquirida durante el gobierno anterior.

Los dirigentes de las organizaciones representaron los intereses de los sectores subalternos difundiendo comunicados, imágenes y hasta canciones que hablaban de sus dificultades. En un blog de organizaciones de agricultura familiar afiliadas a la COCAN un dirigente subió un video de un grupo musical criollo que cantaba:

Desde que el cambio llegó al gobierno
miro el pasado y parece un sueño.
Podía trabajar, podía comer, podía pasear y pagar el colegio.
Podíamos tener una obra social,
pero ahora pagarla te cuesta uno y medio.
Paisaje de Macrilandia
miro y no veo ni un brote verde,
un ajuste aquí, otro más allá
y mi pobre sueldo que baja y se pierde.

En diversas comunicaciones que tuve con dirigentes campesinos de diferentes puntos del país, en reuniones o redes sociales, se mostraron muy preocupados. Fue impresionante la cantidad de mensajes que recibí sobre la situación de los pequeños productores, criollos e indígenas de diversas provincias norteñas: canciones, chistes, notas de prensa, y reivindicaciones de fechas históricas importantes para la causa campesina e indígena (no solo de próceres argentinos sino de distintos países latinoamericanos, como la conmemoración del natalicio de Emiliano Zapata, o discursos del Subcomandante Marcos, de José Carlos Mariátegui y de Evo Morales entre otros.). También comunicados sobre desalojos efectuados a organizaciones de base en diferentes provincias, invitaciones a seminarios y eventos académicos donde se discutía la situación de la problemática de la tierra, envíos de comunicados de las oficinas de gobierno sobre los despidos de técnicos y funcionarios de las áreas vinculadas a la agricultura familiar, etc.

¿Qué mostraban estos mensajes sobre las prácticas organizativas de los dirigentes? Su capacidad de ascender y descender territorialmente, y conectarse con una gran variedad de actores. Una semana, los dirigentes de la COCAN podían estar en una reunión en la oficina central del INTA (en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) haciendo gestiones y acuerdos sobre proyectos para los territorios donde hay organizaciones de base afiliadas a su organización, y la siguiente en alguna localidad del NEA o del NOA encargándose de asesorar a pobladores rurales con problemas de desalojo, ayudándoles a llevar su caso ante la Justicia o realizando consultas en el Instituto de Tierras o Colonización. Además, visibilizaban todas estas problemáticas a través de diferentes estrategias: realizar comunicados y difundirlos en las redes sociales, o acercar los comunicados a los medios de comunicación para que se difundieran a una audiencia más amplia. Para lograr esto, los dirigentes de la COCAN contaron con referentes de organizaciones de base que pueden ser vistos como “sus ojos en el territorio”, o como el termómetro que los mantuvo informados sobre diversos aspectos: los rezagos climáticos, los precios de insumos para la producción agrícola, la producción, los conflictos políticos, sociales, etc. Esta información fue posible gracias a las TIC, gracias a las cuales los referentes de los territorios pudieron intercambiar fotografías, fotos de denuncias, actas, desastres naturales, o videos de represiones policiales en cuestión de segundos. De hecho, contrario a lo que alguien de la ciudad creería, uno de los dirigentes de la COCAN difundió que estaba “en graves problemas” porque se le había “roto la compu”. Cuando viajé con Emiliano, un dirigente de la COCAN, al Impenetrable observé que utilizaba la computadora como un archivero donde constantemente revisaba el estado del arte de sus proyectos y problemas (en el sentido de Wright Mills). Guardaba ahí las planillas de los destinatarios de programas de su organización, los formularios que debían llenarse para ser parte de ellos, ideas que se le iban ocurriendo sobre iniciativas que discutía con los pobladores, legislaciones y proyectos de ley que atañían a la vida de estos, y hasta mapas georeferenciados con los puntos de localización donde construirían los pozos de agua. Toda esta información era importante para Emiliano y su organización porque constituía parte de su acervo y conocimiento para discutir en las reuniones con los funcionarios sobre las problemáticas del territorio: saber qué tipo de desafíos experimentaban los miembros de su organización en los diferentes proyectos y programas estatales,

tener datos actualizados sobre las problemáticas que atravesaban los pobladores rurales y poder así construir su propio diagnóstico.

Por ello sostengo que el dirigente es un productor simbólico de problemas sociales (Bourdieu, 1996). En esta comunicación que tiene con diferentes miembros de su organización ejerce un liderazgo en el sentido de que distribuye tareas, los anima a involucrarse en la lucha y les pide que lo ayuden a hacer el seguimiento de proyectos y tareas organizativas y administrativas en distintos territorios: representando a la organización en reuniones con funcionarios o en seminarios académicos, manteniendo al día los trámites para la personería jurídica y demás trabajos que exigen los diversos proyectos en los que están involucrados (como el armado de capacitaciones y de planillas de beneficiarios para solicitar proyectos, o la actualización de información sobre las problemáticas de tierra y las denuncias realizadas ante la Justicia).

Debido a la creciente efervescencia por la situación del sector a principios de 2018, dirigentes de diversas organizaciones emitieron un comunicado donde le pedían a Amanda Vidal, directora de la Oficina de Desarrollo Rural (ODR), postergar la reunión del CDR¹⁴, enviar el temario de lo que se iba a discutir y convocar a todas las organizaciones de la agricultura familiar. Ante la negativa de Vidal de acceder a estas demandas, los dirigentes de las organizaciones discutieron si debían acudir a la reunión del Consejo. Un dirigente indígena enfatizaba que era importante tomar acciones conjuntas y no presentarse a la reunión. Por su parte, Emiliano dijo que la reunión iba a “estar brava” y no tenía claro si debía enviar a algún cuadro técnico de su organización. Una noche antes de la reunión se comunicó con Joaquina, Casandra y conmigo para pedirnos que fuéramos en calidad de asesoras.

El día de la reunión del CDR vimos que solo estaban presentes los referentes de dos organizaciones y ciertos funcionarios de la ODR. En consecuencia, Joaquina comenzó a inquietarse y pensó que lo mejor sería llamar a Emiliano para avisarle que había pocas organizaciones presentes. Después de colgar al teléfono nos indicó que

¹⁴ Recordemos que todos los nombres de los funcionarios, las agencias estatales y los espacios participativos han sido cambiados con la finalidad de mantener la confidencialidad de los informantes clave.

debíamos irnos. Minutos antes, Vidal y algunos técnicos de la ODR nos habían indicado que la reunión estaba por comenzar y que debíamos entrar a la sala.

Mi interés académico era permanecer en la reunión, pues tenía mucha curiosidad en ver y registrar qué se decía y qué había cambiado con respecto a otras reuniones del CDR a las que asistí durante la gestión de CFK. No obstante, Casandra y Joaquina me hicieron ver que debíamos irnos porque así lo quería la organización. Mi frustración por no poder permanecer me impidió ver, en ese momento, cómo se habían reactualizado los vínculos entre los dirigentes y los funcionarios de la ODR. Esto se veía hasta en el cambio físico del lugar de la reunión y el número de personas convocadas. Se había pasado de sostener las reuniones en uno de los salones principales de la ODR, con un promedio de 80 asistentes, a hacerlas en una pequeña sala de un anexo del edificio donde el número de personas convocadas no llegaba a quince (contando funcionarios y dirigentes).

En diversas comunicaciones Emiliano nos había informado que el trato con los nuevos funcionarios de la ODR era poco cordial e irrespetuoso. Él y otros dirigentes se habían quejado porque Vidal no había cumplido con su promesa de reglamentar la Ley de Agricultura Familiar¹⁵. Además, habían excluido a diversas organizaciones de agricultura familiar por pertenecer a agrupaciones políticas vinculadas con el gobierno de CFK y habían modificado ciertas prácticas sobre el funcionamiento del CDR (por ejemplo, el hecho de que los dirigentes pudieran contar con la posibilidad de juntarse un día antes de las reuniones con los funcionarios, el envío del temario con antelación, etc.).

La anécdota anterior sobre la reunión del CDR a la cual nos envió Emiliano muestra dos hitos importantes: la dificultad de coordinar acciones conjuntas entre

¹⁵ La Ley de Reparación Histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en Argentina provino del seno de la Federación Nacional de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura Familiar (FENAF) y su alianza con algunos diputados del Partido Justicialista. Varias organizaciones criticaron no haber participado en la discusión del proyecto. La Ley fue sancionada el 17 de diciembre de 2014, con el objetivo de contribuir a la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria por medio de la generación de condiciones que permitan que las familias permanezcan en el campo a través de derechos de acceso y gestión de la tierra, agua y recursos naturales, así como del fortalecimiento de las organizaciones por medio de procesos productivos y de comercialización. A la fecha, la ley no ha sido reglamentada.

las organizaciones de agricultura familiar y la continuidad de los intercambios entre dirigentes y funcionarios del gobierno macrista. Con respecto al primer punto es interesante ver cómo no existe un movimiento campesino e indígena unificado. La diversidad de la problemática agraria y rural argentina y la extensión del territorio hacen que las organizaciones sean muy diversas y representen varios intereses. Así, es común observar cómo éstas tienen diferentes estrategias y formas de comunicarse e intercambiar con los funcionarios según su trayectoria, capacidad y estructura. Los dirigentes de cada organización deben evaluar qué tan conveniente es para su organización ir a las reuniones convocadas por el CDR y para ello toman en cuenta desde la posibilidad de que alguien pueda viajar (disponer de tiempo y recursos económicos para trasladarse a Buenos Aires) hasta la importancia de lo que creen que se va a discutir ahí, así como el contexto político.

La decisión que tomó Emiliano sobre enviar asesores técnicos a la reunión del CDR puede leerse como una traición a lo que había acordado y discutido con el resto de los dirigentes de las organizaciones que no asistieron, sin embargo se trató más bien de desconfianza, de asegurarse de que los otros cumplieran con su palabra. Su estrategia fue enviarnos en calidad de informantes, por eso dijo que nos presentáramos como “asesores de la COCAN” y viéramos de qué trataba la reunión y quiénes estaban de las organizaciones. Enviar a un asesor y no presentarse él mismo era una señal de disconformidad hacia la ODR. No obstante, Emiliano también estaba interesado en mantener el vínculo. Por ello, al mismo tiempo que dijo que nos retiráramos, pidió que la semana siguiente lleváramos una nota de parte de la organización a la mesa de entradas de la ODR. Retirarnos de la reunión fue parte de una práctica organizativa articulada con otras organizaciones para mostrarle a la ODR la fuerza del sector. Por otro lado, la estrategia de habernos enviado para “registrar” y luego la nota implicaba el interés en mantener un vínculo con los agentes estatales.

Durante la reunión, Vidal se refirió al comunicado entregado por las organizaciones de agricultura familiar, que reclamaban por la reducción del presupuesto y decidieron no acudir por la falta de cumplimiento de acuerdos anteriores. Aseguró que no había habido reducción alguna de presupuesto para el sector. Y que lo que sugerían las organizaciones con respecto del CDR (poderse reunir un día antes para

discutir los asuntos con los dirigentes y reunirse con mayor frecuencia) no era posible debido a que el Estado debía seguir poniendo el ejemplo de hacer “un gesto de austeridad”. La funcionaria manifestó “su preocupación y tristeza ante la ausencia de las organizaciones” y afirmó que a veces las instancias para pensar las políticas y la gestión se confunden con la política partidaria. Argumentó que “la política se hace en otro lado” y que “el Consejo es un lugar para hacer un camino entre todos”. Con estas opiniones coincidieron otros dirigentes de organizaciones y funcionarios presentes quienes sostuvieron que las organizaciones ausentes debían “desterrar prejuicios” y ponerse a trabajar para lograr consensos (Acta de la reunión del CDR, 2018).

Al analizar el acta me sorprendió que los funcionarios de la ODR hubieran dedicado tiempo a dar su interpretación sobre la ausencia de las organizaciones “que habían sido convocadas”. Al descalificar esta ausencia, Vidal y su equipo no solo estaban reconociéndolas, también las estaban diferenciando de las que estaban presentes. Por otro lado, al detenerse a explicar el comunicado de las organizaciones quiso transmitir y promover la nueva idea de Estado: un Estado eficiente que reduce gastos, y también que busca mantener el diálogo con todos. De hecho, si pude tener acceso al acta es porque la misma ODR decidió enviarla a todas las organizaciones que habían sido convocadas (incluso a las que no estaban presentes). Ésta era su manera de mostrar que ellos eran “un gobierno transparente”. El acta también refleja la disposición y postura del equipo de funcionarios de la Oficina en mantener algún tipo de vínculo con los dirigentes que no fueron a la reunión. Como lo explican Rose y Miller (1992), para hacer los programas operables el funcionario necesita mover fuerzas a su favor. No es casualidad que la COCAN sea una de las organizaciones de segundo grado que más bases territoriales tiene en diferentes provincias del país y que, además, cuente con una sólida trayectoria de participación en torno a las políticas de agricultura familiar en distintos niveles (regional, nacional, provincial) así como en la implementación de diversos proyectos estatales desde hace décadas.

Mientras que los agentes de la ODR esperaban que los dirigentes no hicieran política dentro del CDR ni de los programas de desarrollo rural y agricultura familiar, ellos se dedicaban a hacerla de manera permanente. Desde los discursos donde

buscaban naturalizar ciertas ideas sobre el Estado –como la importancia de la austeridad y la transparencia–, hasta la disputa por las reglas de los espacios de participación.

Conclusiones

“El sueño de todo político es diseñar su propia burocracia, imprimirle su sello personal, convertirla en una fiel ejecutora de sus proyectos y políticas. Pero las burocracias se heredan, no se construyen ex-novo. Y aunque, desde una visión conspirativa, siempre aparecen como maquinarias firmemente decididas a desbaratar las mejores intenciones políticas, la responsabilidad de los propios gobernantes en su accionar no puede minimizarse.”

(Oszlak, 1985, p. 1)

Existe, por un lado, como bien expresa Oszlak, una incidencia de los gobernantes en el accionar de la burocracia. En el caso concreto que se discute en este artículo el recorte presupuestal y el despido masivo de personal forman parte de lo que Wolf llama “el poder estructural” mediante el cual los gobernantes buscan incidir sobre el campo de los otros, distribuyendo el poder entre diferentes grupos según su conveniencia e intereses. No obstante, existe también un límite al modelo jerárquico de implementación: el Presidente y su equipo representan una idea de Estado, pero otra cosa es hasta qué punto logran implementarla en la práctica cotidiana de las agencias estatales (Abrams, 1988; Sharma y Gupta, 2006).

En este sentido, el sistema político puede presentarse como coherente y unificado, por ejemplo Hardie hacía énfasis en el “trabajo en equipo” en oposición a las divisiones del kirchnerismo (Grasa, 2016). Sin embargo, las instituciones de desarrollo rural y agricultura familiar muestran no solo una diversidad de miradas sobre los sujetos agrarios subalternos sino políticas con objetivos contradictorios. Esto responde al carácter pluricentrado y de múltiples niveles de la burocracia, donde conviven actores con diferentes valores, perspectivas y márgenes de incidencia, razón por la cual el conflicto es inherente a las organizaciones públicas (Elmore, 1993). Como bien lo expresa Oszlak (1985), los que llegan al poder también

llegan a encargarse de una máquina que ya está funcionando con tal cantidad de rutinas, procedimientos y reglamentos que ni el más avezado del *establishment* conoce cuál es el marco jurídico aplicable a cada situación.

A la idea de Oszlak agregaría que no solo las burocracias se heredan, sino también los destinatarios de los programas que ejecutan. Esto quiere decir que los funcionarios deben lidiar, hasta cierto punto, con los referentes de organizaciones que participan en el campo de las políticas de desarrollo rural y agricultura familiar, que cuentan con el capital simbólico de ser reconocidos como tales (por la población rural, por otros agentes estatales en diferentes niveles del Estado, etc.) y con el conocimiento de las problemáticas de sus territorios.

Si bien el gobierno de Cambiemos se caracterizó por no reconocer ciertas tramas organizacionales, problemáticas y reivindicaciones (como la tierra), de cualquier manera tuvo que interactuar con estos referentes porque ellos generan las mediaciones necesarias para los accesos a ciertos programas y proyectos en el territorio (Berger, entrevista).

La gestión de Cambiemos modificó los funcionarios a cargo de coordinar el CDR y trató de circunscribir la acción de los referentes de las organizaciones a través de la disminución de la cantidad de convocatorias y reuniones y de no darles el temario de lo que se iba a discutir, pero no logró incidir en las tramas conformadas históricamente entre estos y los burócratas en diferentes estamentos y niveles del Estado (desde funcionarios de diversas agencias estatales hasta técnicos de terreno en las delegaciones provinciales y municipios). Gracias a éstas, los referentes de organizaciones pueden “hacer política”, es decir, aspirar a participar en el diseño y la implementación de las políticas de desarrollo rural e incidir –aunque sea simbólicamente– en el tratamiento de estas cuestiones, como ocurrió cuando los referentes de algunas organizaciones decidieron no acudir a la reunión convocada por Vidal. Este “hacer política” no solo se expresa en su disputa hacia las políticas del gobierno de Cambiemos, sino en la manera en que siguen ejecutando proyectos en sus territorios con el apoyo de ciertas agencias estatales que reconocen sus organizaciones y problemáticas.

Referencias

- Abrams, P. (1988). Notes on the difficulty of studying the state. *Journal of Historical Sociology*, 1(1), 58-89.
- Argentina extractiva: el cambio era la profundización. (29 de diciembre de 2016). *La Tinta*. Recuperado de: <https://latinta.com.ar/2016/12/argentina-extractiva-el-cambio-era-la-profundizacion/>.
- Berger, M. (2018a). En busca de reconocimiento: Las organizaciones de la AF, Campesina e Indígena ante el conflicto por la resolución 125. En M. Panero (Comp.), *Actores, políticas públicas y conflicto agropecuario: a 10 años de la Resolución 125* (pp. 125-155). Buenos Aires: Universidad Nacional de Villa María.
- Berger, M. (2018b). Unificar al sector un análisis etnográfico de los vínculos entre las organizaciones campesinas y las agencias estatales en Argentina. En N. Rangel Loera (Comp.), *La producción de prácticas políticas colectivas: estudios etnográficos en Argentina y Brasil*. [En Prensa]
- Berger, M. (2018c). Reconfiguración de instituciones, redefinición de sujetos y constitución de espacios y tramas organizacionales (2003-2017). *Realidad Económica*, (315), 49-55.
- Berger, M. (2019). *El desarrollo rural y la organización del trabajo agrícola*. Recuperado de: <https://www.argentina.gob.ar/srt/museosrt/voces/berger>.
- Buryaile designó a las nuevas autoridades de INTA, SENASA y Agricultura Familiar. (22 de diciembre de 2015). *Infocampo*. Recuperado de: <https://www.infocampo.com.ar/buryaile-designo-a-las-nuevas-autoridades-de-inta-senasa-y-agricultura-familiar/>.
- Borrador de la Resolución ReNAF-ReNOAF. (2018, marzo). Documento interno.
- Bourdieu, P. (1996). Espacio social y poder simbólico. En P. Bourdieu, *Cosas Dichas* (pp. 127-141). Barcelona: Gedisa.
- CDR. (2018, primer trimestre). Acta de la reunión.
- De Grammont, H. C. (1989). Jaramillo y las luchas campesinas en Morelos. En A. García de León, *Historia de la cuestión agraria mexicana. Política estatal y conflictos agrarios 1950-1970* (Vol. 8, pp. 261-276). Ciudad de México. CEHAM y Siglo XXI.
- Elmore, R.F. (1993). Modelos organizacionales para el análisis de la implementación de programas sociales. En L.F Aguilar (Comp.), *La implementación de las políticas públicas* (pp. 185-249). Ciudad de México: Porrúa.
- García Delgado, D., & Ruiz del Ferrier, C. (2013). El nuevo paradigma. Algunas reflexiones sobre el cambio epocal. *Revista Estado y Políticas Públicas* (1), 64-81.
- Greenpeace. (2017). *Ley de semillas: Del campo al plato, el lobby de las empresas químicas*. Recuperado de: <http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/2017/3/mapa-leydesemillas.pdf>.

- Grasa, J.C. (2016, marzo). Este Ministerio es un solo equipo. *Horizonte Digital*. Recuperado de: <http://horizonteadigital.com/santiago-hardie-este-ministerio-es-un-solo-equipo/>.
- Knight, A. (2002). Armas y arcos en el paisaje revolucionario mexicano. En J. Gilbert y D. Nugent. (Comps.), *Aspectos cotidianos de la formación del Estado. La revolución y la negociación del mando en el México moderno* (pp. 53-105). México: Nueva Era.
- Lattuada, M., Márquez, S., & Neme, J. (2012). *Desarrollo Rural y Política*. Buenos Aires: Ciccus.
- Lattuada, M., Nogueira, M., & Urcola, M. (2012). Rupturas y continuidades en la gestión del desarrollo rural: consideraciones acerca del rol del Estado (1991-2011). *Avá: Revista de Antropología*, (21), 11-41
- Ley 27.118 de 2014. Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva ruralidad en Argentina. 28 de enero de 2015. B.O. No. 33059.
- Ley 26.737 de 2011. Tierras rurales. 28 de diciembre de 2011. B.O. No. 32305.
- Lorca, J. (1 de marzo de 2017). "El proyecto de Macri es especulativo". Entrevista al politólogo Carlos M. Vilas. *Página 12*. Recuperado de: <https://www.pagina12.com.ar/22974-el-proyecto-de-macri-es-el-del-capital-especulativo>.
- Nuijten, M. (2003). *Power, Community and the State*. London: Pluto Press.
- Oszlak, O., & O'Donnell, G. (1995). Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación. *Redes*, 2(4), 99-128.
- Oszlak, O. (15 de enero de 1985). La telaraña burocrática. *Clarín*.
- Panero, M. (2018). Pelea de grandes. La cúpula del agro durante el conflicto de 2008. En M. Panero (Comp.), *Actores, políticas públicas y conflicto agropecuario: a 10 años de la Resolución 125*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Villa María.
- Rose, N., & Miller, P. (1992). Political power beyond the State: problematic government. *The british journal of sociology*, 43(2), 173-205.
- Sarmiento, G. (18 de febrero de 2017). "Orientan el CONICET a las necesidades de las empresas". El Reconocido historiador Ezequiel Adamovsky alerta por el cambio cultural que busca el PRO. *Tiempoar*. Recuperado de: <https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/64781/orientan-el-conicet-a-las-necesidades-de-las-empresas>.
- Sharma, A., & Gupta, A. (2006). Introduction: Rethinking Theories of the State in an Age of Globalization. En A. Sharma & A. Gupta, *The anthropology of the state* (pp. 1-45). Blackwell: London.
- Vigil, C. (2019). *Agricultura Familiar campesina e indígena en la Argentina (2004 -2017)*. Montevideo: Ediciones Universidad CLAEH.
- Wolf, E. (1989). Facing power: old insights, new questions. *American Anthropologist* 92(3), 586-96.